

Este documento presenta uno de los resultados del proyecto “Estudio de procesos regionales de reconciliación en Colombia y la promoción de una política nacional de reconciliación” realizado por la Fundación Friedrich Ebert en Colombia (FESCOL) y el Programa de Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz (CERCAPAZ) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). El proyecto se desarrolló entre julio 2010 y junio 2011 y fue financiado por la GIZ por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). FESCOL y CERCAPAZ agradecen a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) su colaboración durante la realización de este proyecto.

Contextos de la reconciliación en Medellín y Bogotá

SERGIO SALAZAR*
 BOGOTÁ, JULIO DE 2011*

Introducción

El objetivo de este texto es plantear algunos elementos del contexto que consideramos relevantes para pensar en maneras de potenciar los procesos de reconciliación en dos ciudades de Colombia: Bogotá y Medellín. Al pensar el contexto de la reconciliación, de aquella que se juega entre lo social y lo político en la Colombia contemporánea, un elemento ineludible que se siente en los barrios “populares” de Medellín y en las localidades periféricas de Bogotá, es la guerra. Las llamadas “fronteras invisibles” que limitan la libre circulación entre los barrios, especialmente la de los jóvenes, los patrullajes nocturnos, las balaceras, los muertos, etc. La guerra no es siempre el elemento contextual dominante de la reconciliación –puesto que en ciertos lugares las personas entienden su momento actual como una suerte de “post-conflicto” (caso de algunos desmovilizados)-, pero es la base sobre la que se construyen la paz y la reconciliación, es por decirlo de alguna manera, el punto cero. Pero en nuestra guerra, denominada “guerra de baja intensidad”¹, una de las más duraderas de los últimos tiempos en todo el mundo, se generan también dinámicas de construcción de paz². Ese es el otro elemento que quisiera subrayar dentro del contexto de los procesos de reconciliación en Medellín y Bogotá: los esfuerzos de la sociedad civil y del Estado por construir una sociedad reconciliada³. El contrapunto a la guerra.

Esto quiere decir que, excluyendo del análisis otros elementos del contexto como por ejemplo ciertas dinámicas políticas, de participación ciudadana y algunos procesos de construcción de democracia y ciudadanía que son más apreciables en el largo plazo, el panorama no pretende ser completo. Lo que se quiere presentar es simple y llanamente una mirada a factores que afectan muy directamente los procesos comunitarios de construcción de reconciliación y que son percibidos como significativos por quienes están involucrados en ellos.

Para la construcción del documento se han considerado como fuentes básicas de información: los conversatorios y diálogos realizados en el marco del proyecto en torno al tema de la reconciliación sostenidos con representantes de organizaciones que trabajan el tema de la reconciliación o temas afines, información disponible sobre políticas públicas y estadísticas oficiales relativas al tema, entrevistas semiestructuradas sostenidas con personas involucradas en procesos de reconciliación en ambas ciudades, archivos de prensa e informes publicados sobre el tema.

Teniendo en cuenta que existen vasos comunicantes activos entre una y otra ciudad, que el juego político nacional condiciona hasta cierto punto unas dinámicas de guerra y de construcción de paz y de reconciliación comunes, hay que indicar que existen dinámicas locales tan propias en cada una de estas ciudades, que su análisis independiente resulta obligatorio. A partir de allí, se identificarán elementos de continuidad y discontinuidad que permitan pensar en una mirada más integradora. Algunas similitudes se irán señalando a lo largo del texto y al final, a manera de conclusiones, se señalarán las principales diferencias y semejanzas identificadas.

Es de anotar que, más que una investigación exhaustiva, se presenta una recopilación y discusión de elementos que han sido señalados en diferentes momentos, por distintos actores implicados en el tratamiento del tema en las ciudades en donde se realizó el ejercicio investigativo.

El contexto de la reconciliación en Medellín

Una de las últimas publicaciones sobre el conflicto en Medellín, y sin duda entre las de mayor reconocimiento por parte de académicos y expertos, es el libro

“Dinámicas de Guerra y Construcción de Paz. Un estudio interdisciplinario del conflicto armado en la comuna 13 de Medellín”⁴. En este libro, los autores plantean la pertinencia de considerar las dinámicas de guerra y la manera como las personas se relacionan con el enfrentamiento, cómo lo interpretan y cómo responden a la guerra. En este sentido, consideramos útil enfocar el contexto de la reconciliación en Medellín en términos similares: como la identificación de manifestaciones de la guerra urbana y de las iniciativas de reconciliación por parte del estado local y de la sociedad civil.

Conflicto armado urbano y violencia en Medellín

Debido a múltiples factores del entorno físico y social, es evidente que el conflicto armado se presenta de maneras diferentes en los contextos rurales y en los urbanos. Inclusive, existen diferencias sustanciales entre manifestaciones locales de una a otra ciudad. La infraestructura de la ciudad, su posición geoestratégica, su topografía, su estructura poblacional, rasgos culturales, etcétera, determinan la existencia o predominancia de ciertas prácticas de guerra. Por ello, no es lo mismo la guerra en Medellín que la guerra en Barranquilla, Tumaco o Bogotá, aun cuando pueden existir múltiples similitudes y vasos comunicantes. De una manera sintética se señalarán algunas manifestaciones propias de la guerra en Medellín, que en parte son recurrentes en otras partes del país.

Antecedentes del conflicto armado en Medellín

Al preguntar por los antecedentes de la actual confrontación que se vive en las calles de la ciudad, excombatientes y expertos coinciden en puntos de referencia claramente reconocibles. En po-

cas palabras se plantea que durante los años 1950s a 1970s Medellín, gracias al auge de la industria textil y a la gran cantidad de migrantes entre el campo y las ciudades, se convirtió en un centro receptor de población campesina que se asentó en las periferias. Allí se formaron barrios populares en los que se consolidó una creciente clase obrera. Sin embargo, durante los 70s las crisis de la industria textil produjeron un importante crecimiento en las tasas de desempleo, con un consecuente descontento en la población y con el deterioro de las condiciones de bienestar, seguridad y convivencia.

En este escenario se presenta un auge en la economía del narcotráfico, abriendo una importante oferta de trabajo ilegal. Al mismo tiempo, es una época en que las guerrillas se fortalecen en todo el país, y Medellín no es la excepción. Las milicias se posicionan en los barrios periféricos del oriente y occidente de la ciudad, compitiendo por territorios con bandas delincuenciales alimentadas por los narcos. Durante los años 80s se destaca Pablo Escobar dentro de las dinámicas sociales y políticas de Medellín, y pasa de ser un empresario y político exitoso⁵, a convertirse en el más poderoso y temido capo de la historia de Colombia. En 1984, tras el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla ordenado por Escobar, se inaugura el período del narcoterrorismo en Colombia. Medellín fue uno de sus epicentros principales.

Durante la guerra librada por Escobar, las condiciones de convivencia en Medellín se vieron totalmente resquebrajadas. Los lazos sociales rotos, la desconfianza en las instituciones y la sensación de impotencia por parte de autoridades y población civil llevaron a Medellín a niveles críticos. La vida pública en buena parte de la ciudad se terminaba al caer el sol, por miedo a las balaceras y a las bombas. Los atentados terroristas perpetrados en Me-

dellín en aquella época se presentaban en cualquier parte de la ciudad: la plaza de toros, el Parque San Antonio, el Centro Colombo Americano, establecimientos comerciales, policías que volaban por bombas instaladas en sus camiones. También fue aquella la época en que surgieron los Pepes⁶, grupo del que participaron Carlos Castaño y Diego Fernando Murillo, más tarde reconocidos jefes paramilitares. Medellín se convirtió en sinónimo de miedo para los colombianos.

Tras la muerte de Escobar, en los barrios se consolidaron diferentes estructuras armadas. Milicias de las FARC y el ELN, y bandas como La Terraza se apoderaron de distintos territorios y marcaron fronteras, regulando la vida pública en numerosas comunidades. Al mismo tiempo, fue en 1993 y 1994 cuando se logra la desmovilización de aproximadamente 650 hombres de las Milicias Populares de Medellín y el Valle de Aburrá. Durante estos años, la academia y la sociedad civil toman la iniciativa y se crean organizaciones promotoras de los Derechos Humanos, de estudios sobre conflicto urbano, democratización, etc. Surgen iniciativas de la iglesia y el Estado, como la campaña No matarás, o la Consejería Presidencial Para la Paz y la Convivencia en Medellín.

Para finales de los 90s la disputa por el dominio territorial en los barrios de Medellín se recrudeció. En 1998 la entrada del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandado por Carlos Mauricio García Fernández, alias “Rodrigo” o “Doble Cero” desató una nueva guerra en la ciudad. Doble Cero combinó la entrada de hombres armados desde el campo, con la contratación de estructuras delincuenciales como bandas y combos, librando una guerra sin tregua contra las milicias existentes. Así, el Bloque Metro se convirtió en el actor armado dominante en Medellín para 2001.

Ese mismo año Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, crea el Bloque Cacique Nutibara en las calles de Medellín. En un principio, dió su apoyo al Bloque Metro, pero una vez consolidadas las AUC en la ciudad, entraron en disputa, puesto que Doble Cero y Don Berna sostenían posiciones irreconciliables frente al involucramiento de las AUC con el narcotráfico. La guerra, que tuvo en sectores de la ciudad como las comunas 8 y 9 graves enfrentamientos, terminó con la victoria del Bloque Cacique Nutibara y la desaparición del Bloque Metro. Muchos de los combatientes del Bloque Metro fueron asesinados, los que quedaron con vida debieron unirse al Cacique Nutibara.

Mientras se lograba la consolidación del Bloque Cacique Nutibara en la ciudad, se producían acontecimientos que terminarían por posicionarlos como la fuerza ilegal dominante en prácticamente todo el territorio del Valle de Aburrá. Uno de los más significativos fue la Operación Orión, llevada a cabo en la Comuna 13 pero con un impacto más allá de los límites de los barrios en los que ocurrieron los enfrentamientos.

Operación Orión

En la Comuna 13 el retraso institucional era radical “No había CAI, los muertos tenían que ser transportados por la Cruz Roja porque la Policía no podía, y al mismo tiempo había menores con granadas, y las milicias CAP, que involucraban a la vez al ELN y las FARC, eran en extremo violentos y bravos y las milicias cambiaron la numeración de las casas para dificultar capturas y allanamientos por parte de la Fiscalía y la Policía”. En mayo de 2002 “se realizó una intervención militar – la operación Mariscal – para recuperar la seguridad en el sector. Los resultados de dicha operación no fueron (...) contundentes y la situación se hizo aun más

compleja cuando las AUC decidieron solucionar el problema”⁸.

El presidente Alvaro Uribe durante su campaña prometió recuperar todos los territorios vedados en el país. Esta promesa “encontró pronto un desafío concreto en la Comuna 13 en Medellín, donde los combates entre milicias y paramilitares estaban creando un gravísimo problema de orden público y daban una dramática ilustración de la impotencia del Estado con el tema guerrillero y paramilitar. Analistas locales opinaron que “el Estado local no sólo no había logrado monopolizar el uso de la fuerza, sino que parecía que hubiera renunciado a ella” y que había “cesión del control territorial al interior de la urbe a un conjunto de grupos armados ilegales”. (...) la situación era considerada inaceptable”⁹.

La operación Orión se desarrolló a partir del 16 de Octubre 2002 y se prolongó por varios días. Sus objetivos eran “la recuperación territorial y de poder en la zona, enfrentar las milicias e instaurar el dominio de la Ley. La operación se realizó con fuerzas conjuntas del Ejército, Policía, Fiscalía, Fuerza Aérea, Personería y Procuraduría y en coordinación con la Alcaldía”¹⁰.

La operación Orión es una de las más grandes ofensivas militares ocurridas en Medellín. Contó con el apoyo de cuatro helicópteros del Ejército que sirvieron de apoyo a las tropas, especialmente en la toma de las partes altas de la comuna. Como señala Gerard Martin, “la guerrilla había venido incautando casas en las partes más altas de la loma, instalando nidos de águila y trincheras para defenderse precisamente contra este tipo de ofensivas”. La Operación Orión, además de su componente militar, estaba orientada “a llenar el vacío con instituciones y poner todo a trabajar. El Centro de Salud en el sector, que había estado cerrado por

21 días, porque no existían las más mínimas garantías de seguridad, reabrió”¹¹.

A pesar del esfuerzo institucional realizado a raíz de la Operación Orión, la Comuna 13 pocos años después volvió a ocupar los titulares de prensa. La situación, lejos de mejorar, se vuelve cada vez más problemática. Los grupos paramilitares tomaron el control de la comuna y tiempo después de las desmovilizaciones, las llamadas bandas emergentes y las guerras entre combos asociadas con las disputas entre mafiosos se han convertido en la constante. Por otro lado, la Operación Orión se ha convertido en referente obligatorio en los discursos de quienes se han involucrado en dinámicas de construcción de paz y reconciliación. Sus connotaciones son predominantemente negativas, pues existe la idea de que hubo colaboración de los paramilitares con el ejército. Igualmente, se escuchan voces que han denunciado los abusos que se cometieron por parte de la fuerza pública y los grupos irregulares.

Desmovilización de las AUC

Desde el inicio de las negociaciones entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, a mediados de 2003, se planteó la posibilidad de que las primeras desmovilizaciones incluyeran al Bloque Cacique Nutibara. Después de instalada la mesa de diálogo en Santafé de Ralito, Córdoba, se convino que el primer bloque en desmovilizarse sería en Bloque Cacique Nutibara y que lo haría en el Palacio de Exposiciones de Medellín el 25 de noviembre de 2003. En esa fecha 868 hombres fueron desmovilizados como integrantes del Bloque Cacique Nutibara -BCN-. Desde aquel momento hasta el día de hoy los desmovilizados del BCN y posteriormente los provenientes del Bloque Héroes de Granada y de los demás bloques

de las AUC, han sido acompañados en su proceso de reintegración a la vida civil por el Programa Paz y Reconciliación.

Para el momento de la desmovilización las AUC hacían presencia en casi el 90% del territorio del Valle de Aburrá, lo cual favoreció la reintegración en medio del conflicto. El dominio que tuvieron las AUC en Medellín en el momento de las desmovilizaciones permitió que el proceso de reintegración tuviera un buen comienzo. No existía presión militar sobre ellos y la mayoría pudo mantenerse en la legalidad y a salvo durante los primeros años de este proceso. Las tasas de homicidio bajaron sustancialmente en la ciudad y el Valle de Aburrá, y hubo un ambiente propicio para posicionar el tema de la reconciliación. La Alcaldía de Medellín aportó con decisión al proceso y el “modelo Medellín” sirvió de base para el diseño del programa nacional de reintegración implementado por la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica -ACR-.

Sin embargo, los desmovilizados no han estado exentos de riesgos a su seguridad. Muchos han muerto en medio de las balas, otros han sido incorporados en las filas de las bandas emergentes, algunos se han vinculado a dinámicas delictivas, muchos han migrado, pero la mayoría se ha mantenido firme frente al proceso de reintegración. De cualquier forma la tranquilidad inicial del proceso de reintegración que permitía posicionar el tema de la reconciliación en la ciudad ha dado paso a una nueva guerra que se desató a partir del momento en que los jefes de las AUC fueron extraditados a los Estados Unidos.

Extradición de comandantes paramilitares

Después de la operación Orión y de la desmovilización de las AUC la situación en Medellín era esperanzadora. El Progra-

ma Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín se mostraba como uno de los mayores logros a nivel internacional y los habitantes de los barrios se mostraban optimistas aunque cautos. Sin embargo, un hecho político ocurrido durante 2008 cambió el panorama dando la razón a los escépticos. En marzo de ese año, ante evidencias de que muchos de los cabecillas de las AUC seguían manejando actividades ilícitas desde sus sitios de reclusión, el presidente Alvaro Uribe Vélez ordenó la extradición de 14 de ellos hacia los Estados Unidos donde son juzgados por narcotráfico. Entre los extraditados se encontraba Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien para entonces ejercía el control del bajo mundo en Medellín.

Una vez extraditado Don Berna el panorama de la reconciliación en Medellín se vió desfigurado. Sus subalternos Maximiliano Bonilla alias Valenciano y Erik Vargas alias Sebastián entraron en disputa. Muchos desmovilizados fueron y siguen siendo reclutados, otros fueron declarados objetivo militar por rehusarse al reclutamiento, pero en muchos casos se ha logrado que los grupos respeten la decisión de no vincularse al conflicto. Desafortunadamente, una nueva generación de jóvenes residentes en los sectores populares se ha ido vinculando a los combos y bandas que pelean los territorios estratégicos de las comunas de Medellín. Se calcula que entre 3.000 y 5.000 jóvenes forman parte con una u otra función de los grupos en contienda.

Confrontación actual

La guerra actual entre Sebastián y Valenciano, que ha superado las fronteras de Medellín y el Valle de Aburrá, ha pasado por diferentes momentos y puntos de afectación a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La etapa más álgida se

ha materializado en la guerra entre combos vecinos. Algunos combos se aliaron con Sebastián y otros con Valenciano.

Los combos compuestos por jóvenes de un sector del barrio, protegen su territorio. Si cerca hay un combo contrario, procurará tomar su territorio, por su cuenta o a través de alianzas con otros combos cercanos que respondan a su mismo bando. Cercanos a los combos o como parte de ellos, hay jóvenes y niños desde los 10 años de edad, aunque la mayoría se encuentran entre los 16 y los 23 años. Dependiendo de su importancia estratégica (por su poder militar, por su ubicación geoestratégica, por su importancia comercial, etc.), pueden manejar armas cortas o largas: fusiles, granadas de mano, changones, revólveres, pistolas de variados calibres y en general todo tipo de armas ligeras.

Aunque recientemente la estrategia de la guerra entre Sebastián y Valenciano ha cambiado y se ha concentrado en asesinatos selectivos estratégicos, aun se pueden definir con relativa precisión algunos territorios en conflicto.

Territorios del conflicto

Aunque el conflicto armado en Medellín se manifiesta en todo el territorio tocando desde los barrios marginales hasta los sectores más exclusivos de la ciudad, hay algunas zonas en donde la confrontación se ha hecho crónica y por momentos alarmante. Estos territorios considerados zonas críticas por las autoridades locales son básicamente cuatro: la zona nororiental, en los barrios Popular 1 y Aranjuez; zona noroccidental, especialmente en Castilla y Robledo; Comuna 8, con mayor intensidad en La Sierra; y Comuna 13 en varios sectores.

Zona Nororiental: Comunas 1- Popular, 2 – Santa Cruz, 3 - Manrique y 4 - Aranjuez

La zona nororiental está compuesta por las comunas 1, 2, 3 y 4. Aunque en toda la zona el conflicto es sensible para la población, este se agudiza en el sector de La Galera, en el barrio Popular 1 y en El Hueco, en Aranjuez. Allí, jóvenes pertenecientes a bandas y combos aliados con alias Sebastián o con su enemigo alias Valenciano han cometido masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, han creado fronteras imaginarias infranqueables para la población civil. Frecuentemente se presentan enfrentamientos con armas largas y cortas e incluso con granadas, en incursiones o a manera de hostigamiento. Como en todas las zonas críticas de Medellín, el control de plazas de vicio y micro-narcotráfico, vacunas a comerciantes y transportadores, tráfico de armas y control de la población civil y el territorio, son los motivadores de la confrontación. El conflicto se intensificó a partir de abril de 2009 y a la fecha sigue activo a pesar de que la zona ha sido militarizada por períodos prolongados.

Zona noroccidental: Comunas 5 – Castilla, 6 – Doce de Octubre y 7 – Robledo.

En la zona noroccidental, y particularmente en el barrio Castilla y sus barrios vecinos se presentan dos grandes frentes que se disputan el dominio de la zona. Castilla, dominado por una de las mayores bandas de Medellín, Los Mondongueros y sus aliados asociados a Valenciano. A sus alrededores gran cantidad de combos pequeños, no tan poderosos como los Mondongueros de manera individual, pero que en su conjunto suman un gran poder armado asociado a Sebastián. En esta zona el conflicto se manifiesta a través de las vacunas a los comerciantes y transportadores, los continuos hostigamientos y recientemente una masacre en la que murieron cinco personas y otras ocho resultaron heridas (El Colombiano, septiembre 20 de 2010).

Comuna 8 – Villa Hermosa

En la Comuna 8 el foco del enfrentamiento ha sido la parte alta, especialmente los barrios La Sierra y sus vecinos Villa Turbay, Villa Liliam y Las Estancias. Debido a su alto valor estratégico para las rutas de comercio ilegal, esta zona ha representado un bastión para los grupos ilegales. Desde allí, el combo liderado por alias El Rolo, se enfrentó durante largo tiempo con los grupos vecinos. El 31 de octubre de 2010, después de pasar varios meses en prisión alias El Rolo escapó de su sitio de reclusión, por lo que se espera un recrudecimiento del conflicto en esta zona (El Colombiano, noviembre 1 de 2010).

Comuna 13 – San Javier

Finalmente, la Comuna 13 ha sido una de las zonas más preocupantes durante los últimos años. Muchos de los barrios son hoy terreno de confrontación, especialmente las Independencias 1, 2 y 3; Juan XXIII; la Agonía, El Salado, Altos de la Virgen y la Loma. Su posición estratégica, al ser un punto privilegiado en la ruta entre Medellín y el Urabá, hace de la Comuna 13 una zona de vital interés para los bandos en conflicto. Allí los enfrentamientos han alcanzado niveles y frecuencia alarmantes hasta el punto en que el 24 de junio de 2010 se presentaron enfrentamientos con armas largas a plena luz del día, durante varias horas, entre grupos alineados con los capos Sebastián y Valenciano. Fue precisa la intervención del ejército para controlar la situación. Días antes, el 3 de junio, a causa de los choques entre combos, se produjo el incendio de más de 200 viviendas en el barrio Juan XXIII.

Fronteras imaginarias

La guerra entre los capos, llevada al barrio implica demarcaciones territoriales. Debido a que los combos o grupos de jóvenes armados protegen “su casa”, el espacio de una cuadra o hasta de varias manzanas, crean territorios dentro de los cuales se sienten más seguros. Por fuera de los límites su poder es muy restringido, pero dentro de los límites territoriales pueden controlarlo prácticamente todo. Deciden quién entra a su territorio y quién no y cómo se trata a quien entre. Deciden quién vive y quién muere. Las fronteras imaginarias se imponen a la población civil y pueden ser, por decirlo de algún modo, “semipermeables”. Los controles sobre las fronteras pueden aplicarse a toda la población o a ciertos grupos específicos (generalmente los jóvenes), y activarse o desactivarse dependiendo de la hora del día. Las fronteras imaginarias son a los ojos del foráneo invisibles, pero para la gente del barrio son claras. Y en los barrios populares están por todas partes.

Restricción de la movilidad

Tal como ocurre con la permeabilidad de las fronteras imaginarias, la restricción de la movilidad puede aplicarse para todos o solo para ciertos grupos específicos de la población. De nuevo los jóvenes son los más afectados. Normalmente, lo que ocurre es que no se permite que personas foráneas entren al barrio o crucen de un lugar a otro. La movilidad se ha visto afectada en Medellín tanto por el control de entrada y salida de los barrios por parte de los combos como de las fuerzas militares. Este fenómeno aplica especialmente cuando se imponen los toques de queda.

Patrullajes

En las partes altas de la ciudad y en algunos corredores estratégicos de su perímetro

se dan patrullajes frecuentes por parte de los combos. Se reporta la presencia de hombres con armas cortas y largas, en ocasiones encapuchados. Muchas veces los patrullajes se realizan en medio de toques de queda que los ilegales imponen a la población civil.

Toques de queda

En varias zonas de Medellín se presentan los toques de queda, ya sea impuestos por la alcaldía y vigilados por ejército y policía, o sea obligados por los grupos ilegales. Durante los toques de queda se fija un horario, normalmente en la noche, durante el cual se prohíbe la libre circulación de los ciudadanos por las calles de la ciudad. Desde noviembre de 2009 se han decretado toques de queda por parte de la alcaldía en barrios como Castilla y el 12 de Octubre, sectores de la Comuna 1 y de la Comuna 13. Algunos de estos toques de queda han sido decretados solamente para menores de edad, mientras otros se han aplicado a toda la población. La mayoría de las veces, sin embargo, es el miedo utilizado por los ilegales el que obliga a un toque de queda extraoficial.

Vacunación

En la mayoría de los barrios populares las vacunas o “aportes” por protección y seguridad son obligatorios para los comerciantes y en los terminales de buses para los transportadores. El no pago de las vacunas conlleva consecuencias que pueden llegar hasta la muerte, por lo que todos pagan, incluidos los expendedores de drogas.

Volantes

Durante la confrontación entre Valenciano y Sebastián, los volantes han sido usados numerosas veces como forma de intimidación a la población. En la Comuna 13 y en el barrio Popular 1 se han generado desplazamientos masivos debido a ame-

nazas distribuidas en volantes. En Medellín los volantes no son usados para promover el reclutamiento, pues este suele ser voluntario y deseado por un considerable número de jóvenes excluidos o marginados.

Desplazamiento intraurbano

En sectores como La Calera en el barrio Popular 1 familias enteras han sido obligadas a dejar sus hogares porque uno de sus miembros tiene o tuvo vínculos con un bando en conflicto. Al llegar un nuevo jefe, que ha derrotado a quienes mandaron por un tiempo, se asegura de expulsar todo el posible apoyo de la comunidad a sus contrincantes. Sospechas, chismes, malos entendidos y enfrentamientos reales, son motivos frecuentes para expulsar a una familia de su barrio. Estas familias suelen reubicarse en otro sector de la ciudad, aunque el ser nuevos en un barrio implica sospechas y vulnerabilidad frente a los combos.

La Alcaldía de Medellín desde la administración de Sergio Fajardo ha reconocido el problema del desplazamiento intraurbano y atiende a sus víctimas a través de sus programas sociales y particularmente del Programa Víctimas del Conflicto.

Asesinatos selectivos

A medida que la guerra se ha desarrollado, las presiones militares, políticas y sociales de todo tipo obligaron a los actores en conflicto a modificar su estrategia. Durante los últimos meses los índices de homicidios han disminuido y los enfrentamientos entre combos son cada vez menos frecuentes. La guerra se ha concentrado ahora en mandos medios y objetivos estratégicos. Se dice que ya no se paga por cualquier muerto del bando contrario sino por blancos específicos. Aunque de cuando en cuando surgen rumores de pactos entre los dos bandos

o del triunfo de Sebastián sobre Valenciano, los asesinatos selectivos continúan y no se ha confirmado que la guerra se haya definido.

Balas perdidas

Los llamados “daños colaterales” del conflicto son uno de los efectos que más resienten los habitantes de muchos sectores de Medellín. Entre ellos, las balas perdidas son de los más temidos. No solamente existen equivocaciones en los casos en los que una persona es asesinada porque la confunden con otra, sino además existe en los barrios en conflicto el permanente riesgo de ser alcanzado por una bala disparada contra otra persona. Los niños han sido particularmente afectados por las balas perdidas en Medellín y en general en el país.

Territorios de miedo

Aunque las autoridades se esfuerzan por el buen uso y mantenimiento de los espacios públicos, algunos territorios se han ido configurando como territorios de miedo. Por deficiencias en infraestructura o mantenimiento, por el uso comercial, por la presencia de expendios de sustancias psicoactivas, prostitución, etc., estos territorios son temidos por los transeuntes pues llevan la connotación de ser lugares de crimen. La circulación en esos territorios es evitada. Pero lo más significativo es que para algunos sectores de la población, barrios y comunas enteras son considerados como territorios de miedo debido en parte a la estigmatización y a su visibilidad en los medios masivos de comunicación y en parte a hechos violentos concretos.

Amenazas a estudiantes e instituciones educativas

Durante 2009 y 2010 numerosas institu-

ciones educativas reportaron amenazas a sus estudiantes, profesores, directivas y empleados. En algunos barrios los combos han hecho uso de las instalaciones de centros educativos como plataformas de vigilancia y trinchera durante las noches. Algunos estudiantes han sido asesinados en los alrededores de sus colegios y muchos han tenido que cambiar de institución o simplemente dejar de asistir a clases. El problema es recurrente y ha sido constante preocupación del gobierno local y sobre todo de docentes y estudiantes. El fenómeno es de gran impacto en la sociedad, por lo que las autoridades lo consideran prioritario.

Plazas de vicio

Cientos de plazas de vicio se ubican a lo largo y ancho de la ciudad. Según las autoridades el barrio Trinidad mejor conocido como Barrio Antioquia ubicado en la comuna 16, es el de mayor concentración de plazas de vicio o expendios de droga. Allí se puede conseguir todo tipo de sustancias psicoactivas, desde marihuana, cocaína, bazuco, ácidos, éxtasis y hasta heroína. En promedio, cada barrio popular puede tener hasta diez plazas que se van moviendo ocasionalmente con el fin de evitar allanamientos. Las plazas de vicio se asocian con los combos en procura de protección pero son foco de inseguridad para los vecinos.

Reclutamiento

Debido a la fuerza que tiene el fenómeno del narcotráfico y la economía ilegal en Medellín y a su prevalencia en el tiempo, el pertenecer a un grupo ilegal es aspiración de cientos de jóvenes. El reclutamiento en este caso no es forzado, sino que los jóvenes se vinculan por voluntad propia. Sin embargo, factores estructurales y particularmente la marginalización, la violencia intrafamiliar y la falta

de oportunidades influyen en la decisión de muchos. Para contrarrestar este fenómeno, muchas organizaciones adelantan trabajos con las comunidades a través de la educación, el arte y la cultura. Por otro lado, la Alcaldía atiende a jóvenes en alto riesgo de ingresar a grupos armados a través del Programa Medellín Fuerza Joven que ofrece oportunidades de educación, formación para el trabajo, apoyo psicosocial, trabajo comunitario, etc.

Terrorismo

El terrorismo ha dejado en Medellín profundas cicatrices. La ciudad ha visto como los grupos ilegales han volado esculturas de Fernando Botero en el parque San Antonio, el Centro Colombo Americano, la plaza de toros, la Fiscalía, agencias de chance, casinos, el Centro Comercial El Tesoro, el Parque Lleras, etc., las bombas han sido usadas para atacar contra policías, políticos y narcotraficantes. El comportamiento ciudadano y la manera de entender la vida pasa por “acostumbrarse” a ciertos niveles de terrorismo.

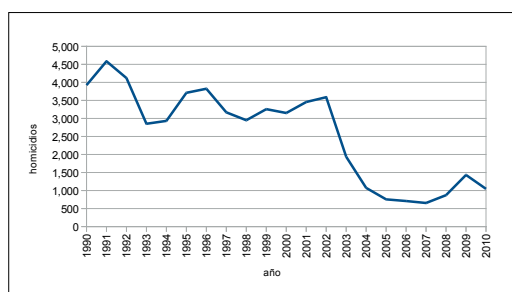
La sociedad civil ha demostrado su rechazo al terrorismo a través de marchas, manifestaciones, expresiones artísticas y culturales, producciones literarias y académicas. Muchas iniciativas se preocupan por generar conciencia en las personas sobre la gravedad de un estado de cosas violento y aterrador. Muchas de esas iniciativas pueden contener las claves de la construcción de reconciliación en medio del conflicto.

Hostigamiento e intimidación a activistas de DDHH

En especial estado de vulnerabilidad se encuentran los activistas de derechos humanos que trabajan en las comunidades, la academia, los gobiernos locales, etc. Líderes activistas han sido asesinados

camino a sus casas. Profesores universitarios han caído en sus propias oficinas. Desde la muerte de Héctor Abad Gómez en 1987, pasando por el homicidio Jesús María Valle en 1998, Hernán Henao, profesor de la Universidad de Antioquia en 1999, Gustavo Loaiza Chalarca en 2006 y muchos más incluyendo estudiantes. Investigadores del IPC, las universidades de Antioquia y Nacional, periodistas, etc., reciben amenazas. Bajo las puertas de las oficinas de las facultades de ciencias sociales se cuelan de cuando en cuando amenazas sobre profesores y estudiantes. El clima de tensión aunque no es generalizado para toda la población, si se siente en los espacios de debate de temas relacionados con la seguridad, la convivencia y la delincuencia en la ciudad.

*Gráfico 1:
Número de homicidios en Medellín 1990 – 2010*



Fuente: Policía Nacional
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República, datos extraídos del Sistema IDH, última fecha de actualización 30 de septiembre de 2010

El contexto de la reconciliación en Bogotá

La contextualización de los escenarios de reconciliación en Bogotá requiere de énfasis distintos a los de Medellín. El tamaño de la ciudad, su importancia estratégica por tratarse de la capital del país, los intereses tan diversos y la dificultad para dominarla, hacen que las

dinámicas del conflicto sean otras. En amplios sectores de la ciudad el conflicto pasa para la mayoría desapercibido, pero los barrios populares más marginados poseen dinámicas de conflicto estrechamente relacionadas con el contexto político nacional y otras más relacionadas con el conflicto social y los problemas de seguridad y convivencia propios de las grandes urbes. La presencia de desmovilizados, gran cantidad de desplazados, grupos paramilitares y milicias, fuerzas del Estado, pandillas y delincuencia común, hacen complejo el panorama para la construcción de reconciliación. Sin embargo, se adelantan iniciativas desde la sociedad civil y el Estado para el mejoramiento de la convivencia, el fortalecimiento de la democracia y la construcción de tejido social y la confianza entre los ciudadanos.

Conflicto armado urbano y violencia en Bogotá

Las dinámicas del conflicto armado de los últimos años en Bogotá tienen sus similitudes y diferencias con las de Medellín. Algunos fenómenos como la territorialización, las fronteras imaginarias, las vacunas, volantes y toques de queda, patrullajes y balas perdidas se presentan en algunos sectores de la ciudad aunque sus manifestaciones son a diferente escala y adquieren significaciones distintas para la opinión pública. Es un lugar común para los bogotanos considerar que el conflicto armado se presenta afuera, en los llamados “territorios nacionales” caracterizados por la ruralidad y la ausencia de estado.

Antecedentes del conflicto armado en Bogotá

El proceso de urbanización en Bogotá tuvo efectos similares a los de Medellín en relación con la infraestructura económica y social de la ciudad. A medida que los

migrantes llegan y la ciudad crece, se forman barrios de clase obrera y en las periferias cinturones de miseria. Estas condiciones, caldo de cultivo para alimentar el descontento social y los problemas de seguridad también han permitido la emergencia de grupos armados y de expresiones delincuenciales tales como las pandillas.

Bogotá ha tenido presencia de milicias urbanas del M-19 y el EPL en los años 70s y 80s, del ELN y las FARC hasta la fecha y de grupos paramilitares como el Bloque Capital hasta el momento de su desmovilización. Por otro lado, la guerra entre el gobierno nacional y los llamados “extraditables” liderados por Pablo Escobar, se sintió con todo su rigor en la ciudad. Asesinatos selectivos y atentados terroristas fueron comunes durante el final de los años 80s y principios de los 90s, sin olvidar acciones de la guerrilla como la toma del Palacio de Justicia en Noviembre de 1985. Para el año 93 la guerra contra Escobar se había recrudecido en todo el país. Las universidades del centro de Bogotá evacuaban sus instalaciones por rumores de atentados terroristas.

Para finales de los 90s, las FARC se habían fortalecido. Tenían tropas ubicadas en varios municipios vecinos a la ciudad, planeaban ofensivas con miras al levantamiento popular y la toma del poder. Durante las negociaciones de paz adelantadas en San Vicente del Caguán, las FARC se fortalecieron política y militarmente. La presencia de la guerrilla en Bogotá fue tan evidente que durante la posesión presidencial de Alvaro Uribe Vélez, las FARC lanzaron explosivos contra la Casa de Nariño.

Una vez rotos los diálogos en San Vicente del Caguán, el ejército lanzó una fuerte ofensiva contra la guerrilla y el presidente Uribe proclamó su política de “mano

dura y corazón grande”. Su estrategia consistió en incentivar las desmovilizaciones a través de las negociaciones con las AUC y por medio de presión militar y ofertas de recompensas y acceso a los beneficios del programa de reintegración para aquellos que deserten de las guerrillas.

Desmovilización

La desmovilización en el contexto que se viene describiendo, empieza a tener dos connotaciones relevantes a la hora de pensar en su lugar y fuerza en la construcción de reconciliación. Por un lado, la desmovilización de las AUC se presentó como una plataforma de construcción de paz bajo un esquema de conversaciones, negociaciones, desarme, desmovilización y reintegración. Por otro lado, para el caso de las guerrillas, la desmovilización ha sido utilizada como una herramienta de guerra; como una forma de desmoralizar al enemigo y restarle fuerzas y como una manera de obtener información de primera mano sobre los diferentes frentes guerrilleros.

Por su tamaño y por facilitar el anonimato, Bogotá se ha convertido en la ciudad con mayor número de excombatientes en proceso de reintegración. La mayoría de estos desmovilizados provienen, a diferencia de Medellín, de grupos guerrilleros. Es decir, la mayoría de los excombatientes que habitan en Bogotá son desertores de las filas guerrilleras y por tanto se convierten en objetivo militar. Esta condición que significa vulnerabilidad en relación con la seguridad personal de los desmovilizados, es una primera garantía de permanencia en la legalidad para quienes han tomado la decisión de desvincularse de las filas de los grupos irregulares.

Provenir de desmovilizaciones individuales tiene otra condición: la ausencia de lazos

sociales entre desmovilizados. La gran mayoría no se conoce entre sí o desconoce a los demás, por lo que llega a habitar la ciudad sin redes de solidaridad que puedan ser de apoyo en el proceso de reintegración. Los provenientes de las desmovilizaciones colectivas de las AUC tienen en cambio la condición de haber recibido la orden de desmovilizarse, orden que no todos compartían. Los excombatientes de las AUC en Bogotá son por ello frecuentemente contactados por grupos ilegales con ofertas y a veces amenazas para que se integren a sus filas. Aunque algunos excombatientes de las guerrillas también reciben este tipo de ofertas y presiones, parecen ser los antiguos para los más acosados. Un número que está por determinarse de ellos hacen hoy parte de pandillas y bandas criminales.

Territorialización del conflicto

Aunque existen tendencias que indican una cierta territorialización del conflicto en Bogotá, las fronteras imaginarias y disputas por territorios no son tan marcadas como en Medellín. De hecho, en pocos barrios se imponen toques de queda y se observan patrullajes. Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y la parte alta del nororiente de la localidad de Usaquén, presentan eventuales patrullajes de personas con armas largas y vistiendo trajes camuflados. Kennedy, Bosa, Engativá y el Eje Centro, también tienen importantes concentraciones de desmovilizados y población en alto riesgo de vincularse a grupos armados. En estas localidades se concentran los esfuerzos institucionales por mejorar las condiciones de seguridad y convivencia a través de los programas de la Secretaría de Gobierno Distrital.

Localidades de Bogotá

Con el fin de ilustrar algunos escenarios de la reconciliación en Bogotá, se presentan a continuación tres casos diferentes: El barrio Santa Cecilia en Teusaquillo, el barrio Caracolí en Ciudad Bolívar y el barrio Santa Rosa en la localidad de San Cristóbal. Cada uno de estos barrios ejemplifica unas condiciones particulares frente a los procesos de reconciliación, que aunque no se den de manera idéntica en otros lugares, si representan contextos similares.

Santa Cecilia: Banda Los Pascuales, un reto para la seguridad y la convivencia en Usaquén

Ubicado en el costado nororiental de la ciudad, el barrio Santa Cecilia es un territorio marginalizado que limita con uno de los sectores más exclusivos de Bogotá. Usaquén es la localidad en la que se encuentran muchas de las más lujosas viviendas de Bogotá, pero también tiene barrios de invasión, pobreza endémica y problemas sociales preocupantes. El territorio que hoy ocupa Santa Cecilia se pobló a partir de los años 70s, a raíz de procesos de migración campesina a la ciudad.

Este barrio es hoy en día receptor de población desplazada, algunos excombatientes, inmigrantes intraurbanos y provenientes del campo. La multiplicidad de orígenes de sus habitantes hace que los vínculos sociales sean recientes y que no haya una sólida construcción de identidad referida al barrio. Esto es común en toda la ciudad, pero en Santa Cecilia las repercusiones respecto a la reconciliación son particularmente fuertes, pues se suman a la presencia de una de las pandillas más temidas de Bogotá: Los Pascuales.

Los Pascuales se dedican al robo en varias modalidades, incluyendo el robo de vehículos, pero lo que realmente afecta a los pobladores del barrio es la manera en la que han impuesto su poder y cómo controlan el territorio. Aunque existen pandillas en muchos barrios de Bogotá y vecinas a Santa Cecilia el poder de Los Pascuales no es disputado. Según versiones de los vecinos, por las noches se realizan patrullajes y algunas veces los han visto portando armas largas.

En Santa Cecilia se adelantó en 2008 – 2009 un proceso que buscaba fortalecer el tejido social y la convivencia. El proceso era liderado por la Secretaría de Gobierno Distrital, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR- y la Organización Internacional para las Migraciones. Durante el proceso se convocó a la comunidad, se hizo partícipe a la Junta de Acción Comunal, el comedor comunitario, el colegio, el centro de salud, los jóvenes, etc. Se realizaron capacitaciones y se adecuó, con el trabajo de la comunidad, una pequeña biblioteca comunitaria con tres computadores para el uso de todos. Aunque se reforzaron puertas y ventanas para evitar robos, dos semanas después de inaugurada la biblioteca comunitaria, Los Pascuales violentaron las puertas y robaron los computadores. El proceso de reconciliación se vio afectado, las confianzas construidas durante el trabajo comunitario se debilitaron y la disposición de las organizaciones comunitarias para participar en este tipo de procesos sufrió un duro traspicé.

Caracolí: grupos armados ilegales y falsos positivos

El barrio Caracolí se encuentra ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar y limita con el municipio de Soacha en la loma. La infraestructura de Caracolí es preca-

ria. La única calle pavimentada es la que comunica al barrio con el resto de la localidad y el pavimento llega solamente hasta la entrada del barrio. El resto de las calles no tiene pavimento y muchas son tan angostas que no permiten el paso vehicular. De cualquier modo no circulan casi vehículos y después de que cae el sol pocos foráneos se atreven a permanecer en el barrio.

Justo al lado de Caracolí, en el alto, se encuentra una base militar. Los soldados patrullan permanentemente, pero saben que en el barrio todavía hay guerrilleros y paramilitares. Durante la época del Bloque Capital las AUC parecieron tomar el control, pero después de las desmovilizaciones ya no se identifican de la misma manera, aunque algunos sean los mismos que se desmovilizaron. Las confianzas por tanto están rotas.

El barrio es receptor de desmovilizados, desplazados, marginados, pobres, y pocos confían en sus vecinos. Incluso algunos habitantes piensan que la junta de acción comunal y otras organizaciones de barrio tienen injerencia de grupos armados ilegales. Y la confianza que pudo haberse construido con las instituciones a través del ejército se vio definitivamente mancillada puesto que de Caracolí provenían algunos de los jóvenes que fueron asesinados por el ejército y presentados como guerrilleros dados de baja en combates, práctica que tomó el apelativo de “falsos positivos”.

Los procesos de reconciliación en barrios como este, en los que además de los patrullajes de la fuerza pública y los grupos ilegales también se ven las vacunas y extorsiones y en donde los activistas de Derechos Humanos y líderes comunitarios son continuamente acosados y amenazados, están lejos de concretarse.

Santa Rosa: desmovilizados, comunidad y reconciliación

La localidad de San Cristóbal en el sur-oriental de Bogotá, cuenta entre sus barrios a Santa Rosa. Este barrio ubicado sobre la antigua vía a los Llanos Orientales, fue construido como una urbanización de casas y edificios de apartamentos de interés social. Con el correr de los años, muchos vecinos dejaron de pagar las cuotas de sus viviendas y perdieron sus casas embargadas por el banco. Las casas desocupadas se convirtieron en refugio de delincuentes, haciendo que el barrio se desvalorizara y perdiera las condiciones mínimas de seguridad para transitar por las calles sin ser violentado.

Una vez adelantadas las desmovilizaciones colectivas de las AUC y con un flujo cada vez más creciente de desmovilizados provenientes de las guerrillas hacia Bogotá, algunos desmovilizados se organizaron y pidieron al gobierno nacional que les permitiera usar los recursos que se destinarían a sus “proyectos productivos” -un rubro incluido en el paquete de beneficios para los desmovilizados-, para la adquisición de casas y apartamentos en el barrio Santa Rosa. Aproximadamente 150 desmovilizados con sus familias adquirieron su vivienda allí. En Santa Rosa conviven desmovilizados provenientes de las FACR, el ELN y las AUC, con habitantes históricos del barrio y con desplazados que también han llegado a vivir allí. En parte por la misma estigmatización de la cual son objeto y en parte debido a su disciplina y capacidad organizativa, su presencia en el barrio ahuyentó a pandilleros y delincuentes.

El proceso de reintegración en Santa Rosa se ha adelantado en perspectiva de reconciliación y ha contado con el acompañamiento de universidades, organizaciones internacionales, la Secretaría de Gobierno Distrital y ONGs locales. En 5 años

que van desde que se inició el proceso en 2006, una líder desmovilizada ha alcanzado la presidencia de la Junta de Acción Comunal en dos oportunidades y se han adelantado proyectos de trabajo conjunto entre todos los miembros de la comunidad para lograr objetivos de beneficio común, como la adecuación de una biblioteca comunitaria. Igualmente, existen organizaciones artísticas y culturales que promueven desde los desmovilizados la construcción de una identidad positiva y en perspectiva de reconciliación.

Reclutamiento

El reclutamiento de jóvenes en Bogotá ha tenido distintas modalidades. En algunos de los barrios más marginales ha habido casos de reclutamiento forzoso y el uso de engaños para atraer a los jóvenes ofreciéndoles trabajo en otras zonas del país. El reclutamiento voluntario también se presenta, pues algunas personas optan tomar las armas. Sin embargo, excombatientes de las AUC relatan que frecuentemente se recoge a indigentes en las calles y se los lleva en camiones a las zonas de combate, en donde sin el entrenamiento requerido deben asumir la vanguardia en los combates. Como se mencionó anteriormente, los desmovilizados en Bogotá son probablemente la población más buscada por los reclutadores, por lo que es de especial importancia la atención a su reintegración social, política y económica.

Terrorismo

Frecuentemente atribuido a las FARC o a narcotraficantes, el terrorismo en Bogotá nunca ha cedido. Por mencionar solamente los hechos más recientes mientras se adelantaba el proyecto de sistematización de procesos de reconciliación, el 12 de agosto de 2010 estalló un carro bomba en la carrera 7a con calle 67 en inmediaciones de la cadena Caracol Radio.

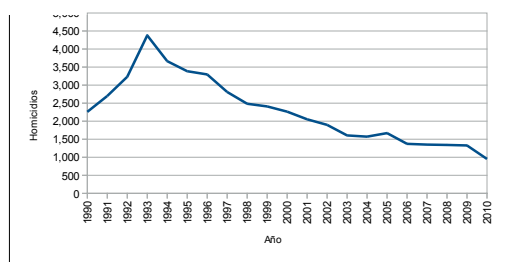
El atentado dejó un saldo de siete personas heridas y daños materiales a más de 1.600 inmuebles. Este tipo de atentados se repite en la ciudad cada cierto tiempo, tal como ocurre en Medellín.

El atentado contra las instalaciones del DAS el 6 de diciembre de 1.989 que dejó un saldo de 104 personas muertas y 600 heridos, la bomba en el centro comercial Centro 93 el 15 de abril de 1.993 que causó 11 muertos y 218 heridos, las 36 víctimas mortales y las más de 200 heridas causados por el atentado al Club el Nogal el 7 de febrero de 2003, el atentado a las instalaciones de la Escuela Militar de Guerra el 19 de octubre de 2009 en el que murieron dos personas y 21 más resultaron heridas. Estos son apenas algunos de los más recordados atentados terroristas, pero decenas de atentados pequeños ocurren entre los de alto impacto. Los efectos psicológicos de estas dinámicas son evidentemente adversos a la reconciliación, cuando no francamente contrarios.

Estadísticas de homicidios

Gráfico 2:

Número de Homicidios en Bogotá. 1990 – 2010



Fuente: Policía Nacional
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH,
Vicepresidencia de la República, datos extraídos del Sistema IDH,
última fecha de actualización 30 de septiembre de 2010

Institucionalidad local y nacional frente a la Reconciliación

Tanto la administración municipal de Medellín como la distrital en Bogotá han decidido apoyar los procesos de reconciliación impulsados desde el gobierno nacional, pero ambos lo han hecho de formas distintas y adoptando estrategias de acercamiento y distanciamiento al discurso político asumido por el Gobierno Nacional. En todo caso, las iniciativas de reconciliación en todos los niveles de gobierno se han centrado en la atención a víctimas, población desplazada y excombatientes. Aunque se realizan algunas actividades en las que se vincula a las comunidades, aún el discurso de la reconciliación es marginal en el país y en los planes de desarrollo -aunque algunos de ellos consideran la reconciliación como un principio transversal al plan-.

Reconciliación en el Plan de Desarrollo Municipal de Medellín

La configuración del discurso de la reconciliación dentro de la administración local de Medellín se realiza de manera paulatina y en un principio sin una orientación política y conceptual muy clara. Podría decirse que el discurso se empieza a sugerir a partir del proceso de DDR de las AUC iniciado en 2003, pero se fortalece desde 2004 cuando la administración Fajardo crea el Programa Paz y Reconciliación. A partir del 2008 con Alonso Salazar como Alcalde, la alcaldía ha revaluado el tema. De cualquier forma, la articulación de las acciones hacia la reconciliación ha girado fundamentalmente en los temas de DDR, prevención del reclutamiento y atención a víctimas del conflicto armado.

Entre los fundamentos del Plan de Desarrollo no se encuentra ninguna referencia explícita al concepto de reconcilia-

ción, aunque se menciona la necesidad de generar confianza y de atender procesos como el de reintegración de excombatientes y atención a víctimas del conflicto armado. En donde aparece con mayor fuerza el concepto es en uno de los cinco componentes de la línea 1. La Línea 1 del Plan Nacional de Desarrollo se denomina “Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa” y su tercer componente es el de “Reconciliación Restablecimiento de Derechos y Reintegración Social y Económica”¹².

El componente de Reconciliación Restablecimiento de Derechos y Reintegración Social y Económica se fija como propósito “promover el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, la resocialización de la población carcelaria, excarcelaria y pospenada, prevenir la vinculación de jóvenes a grupos al margen de la ley y apoyar la reintegración social y económica de los desmovilizados de los grupos armados ilegales que han suscrito acuerdos con el Gobierno Nacional”¹³. En este sentido, la Alcaldía ha fortalecido el Programa de Víctimas del Conflicto Armado, ha creado el Programa Medellín Fuerza Joven con sus proyectos con pospenados, población carcelaria y jóvenes en alto riesgo de ingresar a grupos armados ilegales, y aunque como ya fue señalado, entregó la administración del Programa Paz y Reconciliación a la ACR, sigue aportando recursos para su financiación. Igualmente presta asistencia a población en situación de desplazamiento.

Con relación al concepto de reconciliación el Plan de Desarrollo sostiene que “la concurrencia de políticas nacionales en materia de inserción y de atención a las víctimas del conflicto armado, demandan del Municipio, en coordinación con los diferentes entes territoriales y las organizaciones sociales y gremios económicos, el diseño y ejecución de acciones

y programas orientados a la reconciliación, entendida ésta, como la aceptación libre de intimidación de unas reglas de juego comunes para convivir, representarse y tramitar pacíficamente los conflictos”¹⁴. Es decir, la alcaldía entiende la reconciliación como un pacto entre los ciudadanos. Por otro lado, el objetivo general de la línea 1 es “contribuir a la remoción de obstáculos y barreras de naturaleza económica, social, cultural, política, institucional y territorial que impiden la inclusión y la reconciliación para promover la apropiación de las oportunidades de acceso a los derechos y desarrollo de potencialidades”¹⁵. Es de notar que aunque la definición de reconciliación es limitada, esta idea se asocia con otros elementos que la enriquecen y acercan a definiciones más completas como la planteada por la CNRR.

DDR y Atención a Víctimas en Medellín

Los temas de reintegración de excombatientes y atención a víctimas han sido trabajados por la administración local de distintas maneras y dependiendo del mandatario de turno. En relación con el proceso que se abrió a partir de la desmovilización de las AUC, la creación de la CNRR y la Ley de Justicia y Paz, los momentos han sido vividos por tres diferentes mandatarios.

Durante el año 2003 cuando se pactan las primeras desmovilizaciones de las AUC, el alcalde de Medellín es Luis Pérez Gutiérrez. En ese entonces al definirse que el primer bloque en desmovilizarse sería el Cacique Nutibara, la Alcaldía decide apoyar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Para ello crea el Programa de Reincorporación a la Vida Civil que recibe a los primeros 868 desmovilizados. Pero debido a que esta primera desmovilización se realiza el 25 de

noviembre de 2003, a tan solo 35 días de finalizar el período de gobierno de Luis Pérez, el Programa de Reincorporación solamente alcanza a atender a los excombatientes durante poco más de un mes.

El 1 de enero de 2004 al asumir la alcaldía Sergio Fajardo, el Programa de Reincorporación a la Vida Civil es reemplazado por el Programa Paz y Reconciliación, cuyo objetivo sigue siendo el de atender el proceso de DDR, pero con un marcado enfoque hacia la reconciliación. Al mismo tiempo se empieza a elaborar una propuesta de atención a víctimas que pasaría a convertirse en proyecto de la Secretaría de Gobierno y más adelante se conformaría como el actual Programa Víctimas del Conflicto Armado.

El Programa Víctimas del Conflicto Armado ha asumido la labor de apoyar a las víctimas a través de atención psicosocial, oportunidades de estudio y capacitación y reconstrucción de la memoria de la guerra. El impacto ha sido importante y ha permitido diálogos con niveles nacionales, pero no se ha concretado en una cooperación tan cercana como la que existió durante los primeros años del Programa Paz y Reconciliación.

La articulación con el gobierno nacional en el tema de reconciliación se fortaleció entre los años 2004 a 2007, gracias al Programa Paz y Reconciliación. Este Programa funcionó con fondos provenientes del Gobierno Nacional y una importante cofinanciación de parte de la Alcaldía de Medellín. Básicamente, la Alcaldía desarrolló las funciones que en el resto del país asumió la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica. Pero la Alcaldía, además de las funciones de la ACR, desarrolló un modelo propio de atención al proceso de DDR en perspectiva de reconciliación. Más adelante ese modelo sería adaptado por la ACR en su programa a nivel nacional, aunque

subordinado a las posiciones del gobierno nacional con respecto a la paz y la reconciliación –por lo tanto realiza una intervención de alcances y énfasis muy diferentes a los del modelo de Medellín–.

Por otro lado, en cuanto a la atención a víctimas no se avanzó en modelos conjuntos o de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín. En este sentido la articulación se ha dado en mayor grado entre el Programa Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a través de la realización conjunta de eventos, convocatorias y apoyos puntuales para la orientación y atención a víctimas.

Al final del gobierno de Sergio Fajardo se produjeron rumores de que la alcaldía había realizado pactos con los grupos paramilitares para mantener controlada la violencia en la ciudad; estos rumores recibieron el nombre de Donbernabilidad, como referencia a Diego Fernando Murillo alias Don Berna. Una vez iniciado el período de gobierno de Alonso Salazar se presenta un afán por parte de la Alcaldía de distanciarse de la idea de la *Donbernabilidad*. Así, el alcalde realiza críticas al proceso de reintegración de excombatientes y para el mes de febrero de 2009 estaba entregando la administración del Programa Paz y Reconciliación a manos de la Alta Consejería para la Reintegración. Sin embargo, la Alcaldía continúa aportando fondos a ese programa.

Las acciones de estos programas son complementadas con el programa Medellín Fuerza Joven orientado a atender a jóvenes en alto riesgo de ingresar a grupos armados ilegales y a prevenir el reclutamiento. El esquema de atención es similar al aplicado con desmovilizados, pero el perfil de la población atendida varía en edad y en relación con los grupos ilegales. El programa se plantea como

una alternativa para aquellos que están cercanos a los grupos ilegales pero que todavía no hacen parte integral de ellos. Sin embargo la selección de beneficiarios es un proceso complejo, pues se requiere de avanzados conocimientos sobre el contexto para determinar los límites de la cercanía y el involucramiento de los jóvenes con los grupos ilegales.

Reconciliación en el Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá

Dentro del Plan de Desarrollo propuesto por el alcalde Samuel Moreno para el período 2008- 2012, se incluyeron varias referencias al tema de la reconciliación en Bogotá. El tema se instaló dentro del plan de gobierno *Bogotá positiva: para vivir mejor* como uno de los fundamentos sobre los que se plantea la posibilidad de hacer de la ciudad un lugar más incluyente, equitativo, justo y con espacio para la interculturalidad¹⁶.

Acá se presenta la reconciliación más que como un concepto claramente definido, como una acción que se diluye en su cercanía con la necesidad de garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. La reconciliación se define como “un bien público que propicia las condiciones necesarias para la vida digna y el goce pleno de los derechos humanos y la convivencia democrática en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico, con sujeción a las normas.” (Principios de política pública y acción, Punto 15, Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 2008- 2012).

Hacer de Bogotá una ciudad incluyente y en donde se garanticen los derechos de sus ciudadanos –entre ellos el derecho a la ciudad– se ensambla también con lo que allí aparece como reconciliación. En este escenario la reconciliación se presenta como algo abstracto –no es posible definir si es una práctica, un fenómeno

o quiénes pueden estar involucrados en ella– cuya existencia está mediada por algunas *condiciones*:

“...desarrollaremos acciones que dignifiquen el hábitat, hagan más eficiente la movilidad, generen condiciones de reconciliación, convivencia, paz y seguridad, y promuevan la identidad, el reconocimiento de la diversidad y el diálogo intercultural, con base en un modelo de desarrollo democrático, social e incluyente.”¹⁷ Pese a que se habla de la importancia de construir paz y reconciliación, vincula la convivencia y seguridad ciudadana, al ejercicio de los derechos a la ciudad y a la cultura de la no violencia, es sólo hasta el final del Plan de Desarrollo que aparecen las primeras pistas acerca de quiénes participan y de las políticas públicas diseñadas o previstas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es allí donde se concretan los espacios en los que tendrán lugar dichas políticas públicas (colegios), también se habla de prácticas concretas (la reintegración, la sensibilización frente al tema de los Derechos Humanos y la perspectiva de género, visibilizar las experiencias de reconciliación e incluir tanto a población desmovilizada como a víctimas del conflicto armado en la agenda de la Alcaldía).

DDR en Bogotá

Siendo alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón se produjeron las primeras desmovilizaciones de las AUC. Ya la Alcaldía de Medellín había asumido la operacionalización del proceso de DDR creando el Programa Paz y Reconciliación. Garzón consciente de la necesidad de atender a los excombatientes pero con una visión crítica frente a la perspectiva

del gobierno nacional, decidió no asumir la responsabilidad directa del DDR en Bogotá y crear el Programa de Atención Complementaria a la Población Desmovilizada de Bogotá -PAC-. A través de este programa la Alcaldía pretendía imprimir una visión diferente frente a la reintegración.

El PAC creado en 2006, no se encargaba de dar al excombatiente el paquete de beneficios fijado por el gobierno nacional sino que pretendía facilitar su integración a la vida en la ciudad ejerciendo plenamente sus derechos y deberes ciudadanos. El PAC desde un principio, planteó la necesidad de considerar la reintegración política como una dimensión fundamental dentro del proceso de DDR. Por esta razón, el PAC se ha enfocado en el fortalecimiento de los procesos en los que están inmersos los excombatientes con sus comunidades. De hecho, una de las razones que obligaron a la creación del PAC fueron las quejas de los vecinos y hasta un atentado a uno de los albergues en los que permanecían los excombatientes mientras se les solucionaba su situación legal y de vivienda. Las quejas fueron tantas que la Alcaldía se vió en la necesidad de atender directamente el problema y no dejarlo exclusivamente en manos del gobierno nacional.

Con respecto a la promoción de la reconciliación, el PAC durante el gobierno de Luis Eduardo Garzón fue el programa institucional que más énfasis hizo en el tema. El PAC desarrolló, junto con la CNRR y la OIM, un proyecto piloto de reconciliación comunitaria en Bogotá, por medio del cual se estimularon trabajos conjuntos entre comunidades, víctimas y excombatientes. Esta experiencia, que tuvo sus logros y sus dificultades, fue evaluado y se convirtió en el modelo de acción del área de comunidades de la Alta Consejería Para la Reintegración Social y Económica ACR.

Sin embargo, una vez Samuel Moreno asume la alcaldía, el discurso de la reconciliación dentro del PAC dejó de lado el término reconciliación para reemplazarlo por el de convivencia. Sin embargo, el PAC se ha seguido preocupando por promover el acercamiento entre excombatientes y comunidades, por propiciar el encuentro y los procesos de verdad y memoria en los que pueden participar los excombatientes.

Con respecto a la atención a víctimas del conflicto armado, la Alcaldía Distrital de Bogotá a diferencia de la de Medellín, no tiene un programa específico que se ocupe del tema. Los desplazados y víctimas deben acudir a las instancias nacionales, pero la alcaldía los tiene en cuenta como población vulnerable por lo que les da la posibilidad de hacer parte de otros programas de empleabilidad, capacitación y atención implementados por la Alcaldía. Las víctimas se benefician de comedores comunitarios, eventos culturales, deportivos y recreativos, programas de capacitación y formación para el empleo; pero no a través de un programa exclusivo para ellas, sino haciendo parte de programas que incluyen a muchos tipos de población vulnerables.

La ausencia de un programa que se ocupe exclusivamente de las víctimas en Bogotá hace que se pierdan de vista ciertas dinámicas de victimización. Por ejemplo, en Bogotá no se reconoce oficialmente el fenómeno del desplazamiento intraurbano, por lo que quienes lo sufren no tienen una instancia de la alcaldía a quien acudir en busca de apoyo en el tema. Aunque la Secretaría de Gobierno atiende víctimas de violencias y delitos, dentro de su marco de acción no se contemplan víctimas del conflicto armado que requerirían un trato específico considerando la legislación actual.

El discurso local frente al nacional: encuentros y distanciamientos

Los discursos alrededor del tema de la reconciliación, y sobre todo aquellos que tienen que ver con las funciones del Estado con respecto a la atención a víctimas, reintegración de excombatientes, reparación, justicia y mantenimiento de la seguridad ciudadana, no son los mismos en el nivel nacional y en el local de gobierno. Por supuesto, tampoco son los mismos esos discursos frente a los de la sociedad civil, en donde se encuentra gran diversidad de enfoques, énfasis y posiciones. A nivel de los gobiernos, el discurso nacional se configura a partir de los intereses más generales del país, considerando realidades diversas bajo un marco general. En las localidades por el contrario, se deben ejecutar unos lineamientos de carácter nacional -que no siempre se comparten-, adecuándolos a las realidades sociales, culturales, políticas e ideológicas propias. Por ello, tanto Bogotá como Medellín tienen sus puntos de encuentro y sus distanciamientos frente a las políticas relacionadas con la reconciliación. Esto se hace particularmente evidente en las maneras de proporcionar atención a víctimas y al proceso de reintegración de excombatientes.

En el caso de la reintegración, el modelo de intervención adoptado por la ACR a nivel nacional se construyó a imagen del implementado durante las primeras etapas de las desmovilizaciones de las AUC en Medellín. El Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín fue durante mucho tiempo el ejemplo para el país. Los dineros eran aportados en su mayoría por el gobierno nacional, pero la administración, diseño y ejecución del Programa Paz y Reconciliación estaba en manos de la Alcaldía. La concepción de este programa y en general la de la Alcaldía sobre la manera de construir paz y

reconciliación, en lugar de competir con aquellas planteadas desde el nivel nacional, las complementan y enriquecen. Sin embargo, este esquema no superó los desencuentros políticos que llegaron años después.

Como se mencionó anteriormente, el alcalde Alonso Salazar decidió entregar la administración del Programa Paz y Reconciliación a la ACR a principios de 2009. Esta decisión respondía a un intento por desmarcarse del tema del paramilitarismo en un momento en que el alcalde era señalado como responsable de establecer pactos con Don Berna y sus hombres. Sin embargo, las distancias no solamente se observan en hitos como este, sino también en la forma de afrontar la intervención en las comunidades -esto último correspondiendo más al caso de Bogotá que al de Medellín-. Aunque habiendo aportado de manera tan fuerte a la concepción del gobierno nacional de su programa de atención a la reintegración las visiones son muy similares, los distanciamientos posteriores entre el gobierno municipal y el nacional se debieron más a conveniencias políticas que a distancias ideológicas frente a la reintegración.

El distanciamiento entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional se ha venido profundizando, no sólo debido a las críticas al proceso de reintegración de excombatientes, sino por múltiples factores que incluyen el manejo de la seguridad y la convivencia en la ciudad, el recrudecimiento de la violencia y una gran prevención por parte de la alcaldía que ha denunciado ante los medios de comunicación un supuesto complot contra el alcalde. Según esta versión, que ha sonado de manera recurrente desde 2009, habría enemigos políticos del alcalde aliados con actores oscuros han tratado de desacreditarlo, especialmente relacionándolo con pactos con delincuentes. La paranoia generada por estas versiones ha

causado un cierto grado de aislamiento entre la alcaldía, el gobierno nacional y numerosos representantes de la sociedad civil. Esta situación dificulta en la práctica iniciativas de reconciliación, acercamientos a actores armados, procesos de mediación y resolución de conflictos, caracterización de problemáticas asociadas al conflicto, y en general la articulación entre la Alcaldía de Medellín, las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno Nacional.

En cuanto a la articulación entre las políticas nacionales y los programas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el asunto se vincula más que con dinámicas de figuras políticas, con diferencias ideológicas. De hecho en materia política el alcalde de Bogotá representa al polo opuesto al del presidente en el espectro de la política nacional. Y esto ha sido así durante las dos últimas administraciones.

En materia de reconciliación un punto de desencuentro que puede ser el más representativo es la atención al proceso de reintegración de excombatientes. La Alcaldía de Bogotá en lugar de asumir la atención directa de los desmovilizados, crea un programa complementario. El equipo de trabajo, constituido en buena medida por excombatientes provenientes de todos los grupos irregulares esgrime posiciones políticas en buena medida opuestas a las de los funcionarios de la ACR. Mientras la ACR se preocupa fundamentalmente por el componente psicológico de la reintegración, por que los excombatientes interioricen las normas y obligaciones sociales y de comportamiento, el PAC hace énfasis en el componente político y en la formación de los excombatientes como sujetos de derechos.

Aunque en el discurso oficial se conserva un lenguaje diplomático y de colaboración, que se materializa en algunas ac-

ciones conjuntas entre el PAC y la ACR, funcionarios del PAC reclaman reiteradamente que la reintegración es utilizada por el gobierno nacional como una estrategia de guerra. Se quejan de que los desmovilizados sean usados como fuentes de información para la inteligencia militar, y que algunos participen en operativos, pues esto los pone en riesgo a ellos y al proceso mismo. Pese a esto existen encuentros y acuerdos entre profesionales de campo de ambas instituciones, y los intereses concurren en múltiples espacios y acciones. La articulación institucional aún en medio de las diferencias es, cuando menos, consecuente con los ideales de construcción de paz y reconciliación.

Sociedad civil frente a la reconciliación¹⁷

Dentro del proyecto de Sistematización de Procesos de Reconciliación en Medellín y Bogotá, adelantado por Fescol, se adelantó una consulta por medio de conversatorios y talleres de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y algunos funcionarios públicos. De cualquier modo, por el número de participantes, representan mayoritariamente las posturas de actores civiles que de instituciones gubernamentales. De ellos podemos retomar los siguientes comentarios:

Una de las primeras evidencias encontradas fue la complejidad del problema y la multiplicidad de posturas. El tema genera debate constante, y el debate genera consecuencias en la forma de concebir y trabajar por la reconciliación. Encontramos, por ejemplo, participantes de los conversatorios y diálogos que a pesar de desarrollar un trabajo que para muchos propicia o se orienta hacia la reconciliación, no es concebido por ellos mismos como un trabajo de construcción de reconciliación. Es más, algunos se niegan a

utilizar el término dentro del discurso de su propia organización, y evitan comprometerse con un concepto que para ellos va en detrimento de procesos de verdad, justicia y/o reparación. Igualmente, encontramos actores que desde su propia nominación se identifican como iniciativas por la reconciliación, tales como la Fundación para la Reconciliación, o el Programa Paz y Reconciliación de Medellín.

Se puede afirmar que el término “reconciliación” es más usado por organizaciones del nivel nacional que trabajan en contextos diversos, mientras que las organizaciones pequeñas en su mayoría parece evitar el término y trabajan el tema de forma implícita. Durante los diálogos y conversatorios se identificaron pocas organizaciones o iniciativas locales que trabajen el tema de forma explícita actualmente. La explicación de algunas personas que se entrevistaron durante el proceso de identificación de iniciativas sugieren, que el recrudecimiento de la violencia que se ha presentado durante los últimos dos años, y la estigmatización consecuente hacia los jóvenes en los barrios populares, han hecho que las organizaciones que trabajan a nivel barrial prefieran desmarcarse del término e identificar su trabajo con procesos de convivencia.

Uno de los argumentos en los que se funda el rechazo al uso del término reconciliación por parte de muchos, radica en la relación que se establece entre los conceptos de justicia y reconciliación, entre los cuales se plantea insistentemente que hay una contraposición (a mayores niveles de justicia, menor la disposición de los victimarios hacia la reconciliación), mientras algunos plantean que la justicia contribuye a la reconciliación.

Es de tener en consideración el hecho de que los conversatorios y diálogos se rea-

lizaron justo en los meses siguientes al cambio de gobierno en Colombia. Por ello, se manifestó frecuentemente expectativa frente a la manera en la que se irán configurando las políticas del actual gobierno en relación con el tema, más teniendo en cuenta que durante el tiempo del proyecto el gobierno promovía la unidad nacional y la inclusión de diversas perspectivas para la definición de las principales políticas nacionales por venir. Es posible que esta condición pueda haber contribuido a que los debates no presentaran fuertes polarizaciones.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que se presentó una gran dificultad para identificar experiencias, procesos de reconciliación y organizaciones que explícitamente trabajen el tema. La dificultad se presentó tanto en Bogotá como en Medellín, y puede indicar escasez de iniciativas, resistencia a identificarse como iniciativas de reconciliación y/o precariedad en las redes y lazos de comunicación entre actores comprometidos con el tema. De cualquier forma esto genera dificultades para la articulación de iniciativas e instituciones. Puede ser este uno de los principales aspectos evidenciados por este ejercicio investigativo, pues en la articulación e intercambio de propuestas puede estar una de las vetas más productivas para la dinamización y escalamiento de procesos de reconciliación en Medellín y Bogotá.

Abreviaturas

AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
CAI	Comando de Atención Inmediato
ELN	Ejército Nacional de Liberación
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
BCN	Bloque Cacique Nutibara
ACR	Alta Conserjería para la Reintegración Social y Económica
EPL	Ejército Popular de Liberación
M-19	Movimiento 19 de Abril
CNRR	Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
ONG	Organización No-gubernamental
DAS	Departamento Administrativo de Seguridad
DDR	Desarmamiento, Desmovilización y Reintegración
PAC	Programa de Atención Complementaria a la Población Desmovilizada de Bogotá
OIM	Organización Internacional de Migración

Notas

- ¹ La guerra de baja intensidad (GBI) se define como una confrontación política militar entre Estados o grupos, por debajo de la guerra convencional y por encima de la competencia pacífica entre naciones. La GBI involucra a menudo luchas prolongadas de principios e ideologías y se desarrolla a través de una combinación de medios políticos, económicos, de información y militares. Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_baja_intensidad
- ² Ver: Angarita, Pablo Emilio et al. (2008). *Dinámicas de Guerra y Construcción de Paz. Estudio interdisciplinario del conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín*. Universidad de Antioquia, Medellín.
- ³ Como se podrá apreciar a lo largo del documento, durante el transcurso de nuestra indagación se constató que el concepto de reconciliación es entendido de distintas maneras y haciendo énfasis en distintos elementos, por lo tanto hay múltiples formas de entender lo que es una sociedad reconciliada y las estrategias que a ella conducen.
- ⁴ Angarita, Pablo Emilio et al. Op. Cit.
- ⁵ Pablo Escobar Gaviria fue elegido Representante a la Cámara suplente para el Congreso de la República en 1982. Para 1983 ya el periódico *El Espectador* publicaba artículos en los que se ponía en evidencia la vinculación de Escobar con el mundo del narcotráfico.
- ⁶ *Perseguidos Por Pablo Escobar*, grupo que se conformó en el mundo de la mafia como reacción a la muerte de los hermanos Moncada y Galeano en la cárcel La Catedral, a manos de Escobar en 1992.
- ⁷ Durante esta época se negocia y hace efectiva la desmovilización de las Milicias Populares del Pueblo y Para el Pueblo, Milicias Populares del Valle de Aburrá, EPL, MIR-COAR, etc.
- ⁸ Martin, Gerard. Medellín: Criminalidad, Sociedad y Gobernabilidad. 1975-2010. [Libro en proceso de publicación; cita con permiso del autor].
- ⁹ Idem.
- ¹⁰ Martin, Gerard. Medellín: Criminalidad, Sociedad y Gobernabilidad. 1975-2010. [Libro en proceso de publicación; cita con permiso del autor].
- ¹¹ Martin, Gerard. Medellín: Criminalidad, Sociedad y Gobernabilidad. 1975-2010. [Libro en proceso de publicación; cita con permiso del autor].
- ¹² Plan de Desarrollo 2008 – 2011. Versión pdf línea 1. Alcaldía de Bogotá. En: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/articles-203172_arquivo_pdf1.pdf consultado el 2 de marzo de 2011.
- ¹³ Idem.
- ¹⁴ Idem. El énfasis es mío.

Agencia GIZ en Bogotá
Cra. 13 N° 97-51, Of. 302, Tel. 6361180/ 6361180
E-Mail: giz-kolumbien@giz.de
www.giz.de/colombia

¹⁵ Idem. Pp 1 - 9.

¹⁶ “El plan de desarrollo “Bogotá positiva: para vivir mejor” busca afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor. En la que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales con criterios de universalidad e integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que contribuya al desarrollo de la familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia. Una ciudad incluyente, justa y equitativa, en la que la diversidad y la interculturalidad sean una oportunidad y la reconciliación, la paz y la convivencia sean posibles.” Punto 1, Plan de Desarrollo económico, social y ambiental 2008- 2012.

¹⁷ Capítulo 2 Derecho a la ciudad, Artículo 8, Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 2008- 2012

¹⁸ Adaptación de los comentarios finales del Documento de Sistematización de Procesos de Reconciliación construido en el marco de este mismo proyecto. Fescol (2010 - 2011). Sin publicar.

Bibliografía

- Angarita, Pablo Emilio, Héctor Gallo y Blanca Inés Jiménez (eds.). (2008). *Dinámicas de Guerra y Construcción de Paz. Estudio interdisciplinario del conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín*. Universidad de Antioquia, Medellín.
- Plan de Desarrollo 2008 – 2011. Bogotá positiva: para vivir mejor. Versión pdf Alcaldía de Bogotá. En: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/articles-203172_arquivo_pdf1.pdf consultado el 2 de marzo de 2011.
- Martin, Gerard. Medellín: Criminalidad, Sociedad y Gobernabilidad. 1975-2010. [Libro en proceso de publicación; cita con permiso del autor].
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Área de DDR (2010). *La reintegración: logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas. II informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Área de DDR*. Bogotá, DC.
- * Antropólogo con maestría en Estudios Políticos. Experiencia práctica y en investigación en mediación y resolución de conflictos, DDR, reconciliación, Derechos Humanos y Justicia Transicional. Correo electrónico: sergiosalazarp@gmail.com

Fescol
Calle 71 N° 11-90, teléfono 3473077, 3473115,
E-mail: fescol@fescol.org.co, www.fescol.org.co
Bogotá, Colombia